

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 1 .- .-

NOMENCLATURA	: 1. [40] Sentencia
JUZGADO	: 29° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-32959-2019
CARATULADO	: JORQUERA/FISCO DE CHILE/CDE

Santiago, diez de Enero de dos mil veintidós

VISTOS:

Nelson Guillermo Caucoto Pereira y Francisco Javier Ugás Tapia, abogados, ambos domiciliados en pasaje Doctor Sótero del Río N° 326, oficina 1104, Santiago, en representación de Bernardo Primitivo Jorquera Guerrero, ingeniero en ejecución metalúrgica, domiciliado calle San Mateo N° 4719, Macul, interponen demanda de indemnización de daños y perjuicios en juicio ordinario de hacienda, en contra del Fisco de Chile, representado por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud Tapia, abogada, ambos con domicilio en calle Agustinas N° 1687, Santiago.

Exponen que el 12 de septiembre de 1973, en circunstancias que Bernardo Jorquera se encontraba en la vía pública, en las inmediaciones de la entonces Universidad Técnica del Estado (hoy Universidad de Santiago de Chile), ubicada en avda. Libertador Bernardo O'Higgins N° 3363, Estación Central, fue detenido sin justificación por un grupo de militares no identificados pertenecientes al Ejército de Chile. Tras su detención, fue trasladado inmediatamente en un autobús al entonces Estadio Chile, ubicado en calle Arturo Godoy N° 2750, vehículo al cual fue obligado subir mediante golpes de culatazos proferidos por parte de los funcionarios militares. La víctima permaneció en el Estadio Chile, recinto de detención y tortura, hasta el 16 de septiembre de 1973, lugar en que estuvo incomunicado y fue sometido a diversos tipos de apremios físicos y psicológicos por parte de sus captores.

Luego, ese mismo día 16 de septiembre de 1973, la víctima fue llevada al Estadio Nacional, recinto que también había sido adaptado como uno de detención y tortura. En tal lugar, Bernardo Primitivo Jorquera Guerrero también fue



«RIT»

Foja: 1

sometido a diversos vejámenes -físicos y psicológicos- e interrogatorios, permaneciendo incomunicado.

Un día no determinado de noviembre de 1973, fue llevado por personal del Ejército de Chile del Estadio Nacional al Campo de Prisioneros de Chacabuco. Explica que el traslado de la víctima y de otras personas injustamente privadas de libertad fue realizado de Santiago a Valparaíso en un autobús. Ya en Valparaíso, fue obligado a abordar un barco mercante que lo trasladó a él y a otros detenidos hasta la ciudad de Antofagasta. En ese lugar, los militares llevaron a Bernardo Primitivo Jorquera Guerrero y los demás detenidos al Campamento de Prisioneros de Chacabuco, lugar en el cual permaneció recluso hasta el día 5 de julio de 1974, día en que fue dejado en libertad.

En 1975, dada la situación represiva vivida y la circunstancias que se vivían en el país, el actor decide partir al exilio hacia Canadá, como refugiado político.

Sostienen que los efectos de los hechos criminales perpetrados en la persona de Bernardo Primitivo Jorquera Guerrero perduran hasta el día de hoy y lo afectan gravemente. Él aún sufre por el daño que le ocasionaron agentes del Estado de Chile, producto de los hechos que le correspondió vivir en el período en que estuvo cautivo, los que marcaron de manera determinante su vida.

Por los motivos anteriores, el sr. Jorquera Guerrero ha sido establecido como víctima de violaciones a los Derechos Humanos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en su informe del año 2004, figurando bajo el numeral 12.402 del listado de víctimas de prisión política y tortura reconocidas por dicha Comisión de Verdad.

Por estos antecedentes es que demandan indemnización de daños y perjuicios en contra del Estado de Chile, con el objeto de que se indemnice a su representado, y se repare, en parte siquiera, el daño que se le ha causado.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, afirman que los hechos antes relatados forman parte del catálogo de crímenes reconocidos en la comunidad internacional como de lesa humanidad, según lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Núremberg de 1945, declaración confirmada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de febrero y 11 de diciembre de 1946, que ha sido actualizada con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobada en 1998.



«RIT»

Foja: 1

En relación a la responsabilidad del Estado, indica que el artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado podrá reclamar ante los Tribunales de Justicia, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en ese sentido.

Luego se refiere al artículo 1° inciso 4° de la Carta Fundamental, así como a sus artículos 5° inciso 2°, 6° y 7°.

Reflexionan sobre la responsabilidad del Estado a la luz del Derecho Internacional, planteando que en materia de Derechos Humanos tiene una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales. También lo hacen sobre la improcedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad.

Se refieren, a continuación, a la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, por tratarse de materias que se encuentran regidas por normas de carácter público e internacional, citando al efecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y el Convenio IV de La Haya.

Hacen referencia a sentencias de la Excma. Corte Suprema en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, individualizando 117 causas en que el Máximo Tribunal ha emitido pronunciamiento.

En cuanto al daño, especifican que el sufrido por el actor es de naturaleza moral, que se expresa en el dolor, sufrimiento, angustia, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima cometida en contra de su persona, que como víctima de crímenes de derecho internacional le ha tocado soportar, refiriendo que la dolorosa situación a la que se ha visto enfrentado configura un claro daño moral que, según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional, amerita ser reparado (indemnizado).

Piden se condene al Fisco de Chile al pago total de \$150.000.000 a título de indemnización por el daño moral que se ha causado al demandante, como consecuencia directa de los hechos criminales perpetrados en su contra, por parte de agentes del Estado, o bien, la suma que este Tribunal considere en justicia, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda hasta el pago efectivo de la



«RIT»

Foja: 1

indemnización, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período, con costas.

Con fecha 16 de diciembre de 2019 se notifica la demanda.

Con fecha 2 de enero de 2020 el Fisco de Chile contesta la demanda.

Alega la excepción de reparación integral, toda vez que la demanda sería improcedente, porque el actor ya habría sido indemnizado. Reflexiona acerca del marco general de los resarcimientos ya otorgados y la complejidad reparatoria, señalando que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del entonces Presidente Patricio Aylwin, en lo que respecta a la justicia transicional, fueron los siguientes: "a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; b) la provisión de reparaciones para los afectados; y, c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse". En lo relacionado con el segundo objetivo, plantea que la Comisión Verdad y Reconciliación o "Comisión Rettig", formuló en su informe final una serie de "propuestas de reparación", entre las cuales se encontraba una "pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas" y algunas prestaciones de salud. Dice que dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el sr. Presidente de la República envió al H. Congreso, que luego se convertiría en la Ley N° 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, "reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas". Por su parte y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, precisa que el ejecutivo, siguiendo el informe de la Comisión, entendió por reparación: "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe".

Agrega que a dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena en "un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas".

Concluye que la compensación de daños morales y la mejora patrimonial son dos claros objetivos de estas normas reparatorias.



«RIT»

Foja: 1

Asimismo, que una vez asumida esta idea reparatoria, la Ley N° 19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, que explican cómo el país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional, según asevera.

Indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones: i) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; ii) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y, iii) reparaciones simbólicas.

En cuanto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, manifiesta que diversas leyes la habrían establecido, incluyendo a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos. Destaca que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, al mes de diciembre de 2015, en concepto de: a) pensiones, la suma de \$199.772.927.770, como parte de las asignadas por la Ley N°19.123 (Comisión Rettig); b) pensiones por \$419.831.652.606, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.992 (Comisión Valech); c) bonos por \$41.856.379.416, asignados por la Ley N° 19.980 (Comisión Rettig) y otros \$22.205.934.047 por la referida Ley N° 19.992; d) desahucios (bono compensatorio) por la suma de \$1.464.702.888, asignados por medio de la Ley N°19.123; y, e) bono extraordinario (Ley N° 20.874) por la suma de \$21.256.000.000. En consecuencia, al mes de diciembre de 2015 el Fisco habría desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.

Luego de referirse a las otras formas de reparación implementadas, sostiene en materia de identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas, que de todo lo expresado podría concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de Derechos Humanos no solo han cumplido los estándares internacionales de justicia transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera. Por tanto, considerando que la acción se basa en los mismos hechos y se pretende con ella se indemnicen los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias enunciadas, opone la excepción de pago, por haber sido indemnizadas las demandantes en conformidad a la leyes N° 19.123 y 19.980.

A continuación, opone la excepción de prescripción extintiva, que funda, en síntesis, en que según lo que se expuso en la demanda, la detención ilegal y tortura que sufrió el actor, ocurrió desde el día 12 de septiembre de 1973 y hasta



«RIT»

Foja: 1

el día 5 de julio de 1974. Agrega que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia, sino hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda, esto es, al 13 de diciembre de 2019, había transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil.

Alega la excepción de prescripción de 4 años establecida en dicha norma legal y, en subsidio, la excepción de prescripción de 5 años del artículo 2515, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a la indemnización y la notificación, igualmente transcurrió con creces el plazo legal.

Sobre el particular, indica que por regla general todos los derechos y acciones son prescriptibles y que, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, que en este caso no existe. En el mismo sentido, considera que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras.

Recuerda que la prescripción es una institución universal y de orden público, manifestando que las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil que la consagran y, en especial, de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general, para todo el ordenamiento jurídico y no solo para el ámbito privado. Posteriormente, dice que la jurisprudencia existente en la materia, citando fallos de la Excma. Corte Suprema que a su entender tendrían aplicación para el caso, no otorgarían a la indemnización de perjuicios, cualquiera sea su origen o naturaleza, un carácter sancionatorio, de modo que jamás puede de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago, por ser su contenido netamente patrimonial. Así planteado, postula que no debe sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Asegura que la imprescriptibilidad conforme al derecho internacional de los derechos humanos no contempla las acciones civiles derivadas de los delitos o crímenes de lesa humanidad ni prohíbe o impide la aplicación del derecho interno.

Por último, plantea que el monto pedido sería excesivo, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado y los montos promedios fijados por los Tribunales de Justicia, que habrían actuado con mucha prudencia. En subsidio, señala que respecto a la regulación del daño moral



«RIT»

Foja: 1

debe considerarse los pagos ya recibidos de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación N° 19.123 y 19.980. Alega la improcedencia del pago de intereses y reajustes.

Con fecha 13 de enero de 2020, la parte demandante evacúa el trámite de réplica.

Esgrime la improcedencia de la excepción de pago, también denominada “excepción de reparación integral” y de “excepción de pago”, puesto que en el mejor de los casos, los montos que otorgan las leyes referidas solo constituyen pensiones de sobrevivencia por los actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990. Asevera que dichas pensiones en ningún caso reparan íntegramente el dolor experimentado por el demandante, en su calidad de víctima de violaciones graves a sus Derechos Humanos.

Destaca que el Fisco reconoce por medio de sus alegaciones que se produjo un crimen de lesa humanidad y que ese abuso produjo un daño moral a la víctima directa que representa, y que a su juicio “los pagos” que realiza el Fisco implican un acto real y un reconocimiento implícito y explícito de la responsabilidad que le cabe, extinguiendo de tal manera la prescripción de la acción que alega.

En relación a la Ley N° 19.123, invocada por la demandada como justificación para concluir el resarcimiento del daño moral, expone que en su artículo 2° se establece que: “Le corresponderá especialmente a la Corporación (...) Promover la reparación del daño moral de las víctimas”, entendiendo que la palabra promover no es sinónimo de reparar y que, por consiguiente, en el caso de su representado, no se ha reparado íntegramente el daño moral que padece hasta hoy. Lo anterior, porque el sentimiento de injusticia y de no haber sido reparado totalmente subsiste intacto. Además, asevera que el mismo cuerpo legal no considera incompatibles la pensión de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral. Cita jurisprudencia en fundamento de sus dichos.

Agrega que si se aceptara la tesis fiscal, el monto de la reparación que han recibido las víctimas estaría fijado de manera unilateral y arbitraria por el mismo responsable, es decir, por el Estado de Chile, quedando vedado a las víctimas discutirlo, lo que sería contrario a derecho.

Respecto a la excepción de prescripción extintiva, indica que le parece jurídicamente insostenible afirmar que las únicas reglas que existen en Chile para



«RIT»

Foja: 1

regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil. Tal afirmación sería errónea, por cuanto trae aparejada la negación rotunda de la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional que, por lo demás, ya han sido aplicadas por nuestros tribunales superiores en materia de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo entre ellos a la Excelentísima Corte Suprema, citando a continuación variada jurisprudencia.

En relación al monto demandado, señala que no hay dinero que supla el dolor experimentado. Y en cuanto al cobro de reajustes, reitera lo expuesto en el libelo pretensor.

Con fecha 22 de enero de 2020 la demandada evacúa el trámite de duplica, reiterando sus defensas.

Con fecha 28 de enero de 2020 se recibe la causa a prueba.

Con fecha 3 de noviembre de 2021 se reactiva el término probatorio.

Con fecha 5 de enero de 2021 se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que del examen de los escritos de discusión, fluye que la tesis fáctica propuesta, respecto de la detención ilegal y torturas sufridas por Bernardo Primitivo Jorquera Guerrero, además de su auto-exilio, son el resultado de la acción injusta y cruel de algunos agentes del Estado, durante el denominado “régimen militar” o simplemente la “dictadura”, hechos que no controvertidos.

En línea con lo anterior, no se rebate que por esos motivos el actor fue calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida por el Decreto Supremo N° 1040 del año 2003 del Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech I, asignándole el número 12402.

Por lo tanto, se tiene por establecido definitivamente y desde ya que Bernardo Primitivo Jorquera Guerrero fue víctima de detención ilegal y torturas desde el 12 de septiembre de 1973 hasta el día 5 de julio de 1974, en las ciudades de Santiago y Antofagasta, y que decidió exiliarse en el año 1975, para escapar de futuros apremios, todo ello producto de la acción de agentes del Estado, siendo dichos actos constitutivos de un crimen de lesa humanidad.



«RIT»

Foja: 1

SEGUNDO: Que, no obstante, se debe consignar que la parte demandante rindió la siguiente prueba.

Documentos:

1.- En folio 1, certificado de nacimiento emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de Bernardo Primitivo Jorquera Guerrero, nacido con fecha 9 de octubre de 1943.

2.- En folio 1, copia de carpeta de antecedentes del Sr. Jorquera Guerrero, compuesta por los documentos que fueron considerados por la Comisión Valech al momento de calificar su calidad de víctima de la prisión política y tortura y custodiados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

3.- En folio 1, copia de certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos el día 1 de abril de 2019, en el cual se constata que Bernardo Primitivo Jorquera Guerrero se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida por Decreto Supremo N°1.040 del año 2003, del Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech I. Se adjunta nómina del Informe de la Comisión referida, donde aparece Bernardo Primitivo Jorquera Guerrero, signado con el número 12.402.

4.- En folio 11, copia de sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 29 de noviembre de 2018, en causa caratulada "Órdenes Guerra y otros vs Chile", CDH-2-2017.

Testigos:

1.- María Lucila Mora Valdebenito, quien en síntesis respecto del segundo punto de prueba, responde que se han causado a la víctima problemas psicológicos y económicos. Psicológicamente está mal, se le olvidan las cosas, no pude dormir en la noche, anda distraído, no se concentra. Lo anterior, porque recuerda mucho lo que pasó cuando lo tuvieron detenido. Desde el punto de vida económico, tuvieron problemas con la alimentación, ya que él no podía trabajar y no había dinero para comprar alimentos, ya que llegó en muy mal estado luego de quedar en libertad. Le consta por haber trabajado con los padres de la cónyuge del demandante, lo conoce bien y ha visto lo relatado.



«RIT»

Foja: 1

Luego refiere que don Bernardo fue detenido para el golpe militar en septiembre de 1973, quien trabajaba en ese momento en Chuquicamata y estaba en Santiago haciendo unos trabajos.

Dice que actualmente el demandante está en Canadá.

2.- Héctor Bravo Zamora, quien respecto del segundo punto de prueba responde que es evidente que Bernardo fue muy perjudicado en su vida profesional, física y psicológica luego de pasar 9 meses prisionero y torturado. Que tuvo que migrar a Canadá, donde aún reside, pero que nunca han perdido el contacto. Cuando se encontraron en Chile en el año 2000, aproximadamente, el demandante le contó que no pudo ejercer su profesión de ingeniero, por lo tanto, solo trabajó en otros trabajos menores. Agrega que es un hombre muy inseguro, temeroso y que se sentía perseguido. Jubiló trabajando en Canadá, a pesar que trató de volver a insertarse en Chile, pero no pudo, porque estaba en una especie de lista negra.

Indica que don Bernardo fue detenido el 12 de septiembre de 1973 y que sufrió torturas.

Dice que actualmente el demandante vive en Canadá y que se comunican constantemente por teléfono.

3.- Luis Alberto Calderón García, quien respecto del segundo punto de prueba responde que conoció a don Bernardo a fines de los años 70 o inicios de los 80 en Winnipeg, Canadá, donde también vivió el exilio, y se dieron cuenta que habían compartido en los lugares de detención sin haberse conocido. Indica que todos quedaron dañados de una manera u otra, desde el punto de vista psicológico y físico, por las torturas y apremios que sufrieron.

Luego sitúa en el tiempo las detenciones a las que hizo referencia, que ocurrieron desde el 11 de septiembre de 1973.

TERCERO: Que, además, constan los siguientes oficios:

1.- En folio 20, Oficio ORD N°C11/540, emitido por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, PRAIS, en el que se adjuntó la "Norma Técnica para la atención de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990", del Ministerio de Salud.



«RIT»

Foja: 1

2.- En folio 23, Oficio emitido por el Instituto Latinoamericano de Salud Mental con fecha 6 de marzo de 2020, en el que se adjuntó documentación sobre las secuelas en el plano de la salud mental en los familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante la Dictadura Militar.

3.- En folio 32, Oficio emitido por el Arzobispado de Santiago con fecha 28 de abril de 2020, en el cual se adjunta fotocopia de carta de doña Ruth tapia Van C., dirigida al Jefe de la Secretaría Ejecutiva Nacional del Detenido, solicitándole agilizar las diligencias para aclarar la situación de su esposo, el sr. Jorquera Guerrero.

CUARTO: Que, así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas por las partes, comenzando por los instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones fundadas en causal legal y acogidas respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la contraria, ni alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se reconoce a los instrumentos señalados el valor probatorio que la propia Ley les atribuye, según su naturaleza, salvo los privados emitidos por terceros y que no fueron ratificados en el juicio, que solo se tendrán como base de una presunción judicial.

En efecto, la justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio corresponde hacerla en la forma dispuesta por el legislador. Por tanto, respecto de los instrumentos públicos, se advierte que emanan o fueron autorizados por un funcionario público, actuando en tal carácter y en materias de su competencia, contando con las formalidades que señala la ley, sin que la circunstancia de ser una copia les reste valor, precisamente por no haber sido impugnados.

De esta manera, los instrumentos públicos acompañados hacen plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, gozando de una verdadera presunción de autenticidad.

De cualquier manera y en una perspectiva general, se percibe como un hecho público y notorio que existe en la sociedad un consenso mayoritario acerca de que efectivamente se violaron los Derechos Humanos de muchas personas durante el gobierno autoritario del Pdte. A. Pinochet, conforme dan cuenta las condenas que se han sucedido desde que el país retomó el sendero democrático. Por lo tanto, coherente con la defensa desplegada por el Fisco, no hay motivo serio y grave para dudar acerca de la verdad de los hechos relatados en estos



«RIT»

Foja: 1

informes, especialmente los confeccionados por la Comisión Valech I, acompañados –en lo pertinente- en copia.

Por último, en cuanto a los testimonios, se constata que coinciden en la impresión e imagen que tienen acerca de las consecuencias en la persona del demandante de los hechos que describen, secuelas que conocen personalmente y que no resultan para nada extrañas a eventos traumáticos como los sufridos por el sr. Jorquera Guerrero por razones políticas. Por tanto, se valora sus dichos conforme a la regla segunda del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil.

QUINTO: Que, en cuanto a las excepciones de reparación integral y pago opuestas por el Fisco, debe decirse que no consta en autos que se haya rendido prueba alguna respecto de aquello. Con todo, la defensa del actor no contravino que hayan recibido los beneficios y transferencias que señala el Fisco en su contestación, por ser una consecuencia necesaria del hecho de haber sido incluido en la nómina del informe realizado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, no debe olvidarse que el hecho fundante de la responsabilidad pretendida es un delito de lesa humanidad, esto es, aquellos actos que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad considera cometidos *“como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”*, incluyendo asesinato, exterminio, prisión arbitraria, violación, tortura, persecución política, desaparición forzada y otros actos inhumanos graves, calificación jurídica que no fue objeto de debate entre las partes, motivo por el cual se debe atender a los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos, integrados a nuestra legislación interna por disposición del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho de las víctimas y otras personas a obtener la reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, puesto que *“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”*.

En este sentido, conviene recordar que los artículos 1.1 y 63.1 del Pacto de San José de Costa Rica, publicado el 5 de enero de 1991, establecen lo siguiente:

“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por



«RIT»

Foja: 1

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social". "Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera precedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada".

Por lo tanto, se constata una clara divergencia entre el contenido de las excepciones señaladas y lo dispuesto por la Convención Americana, debiendo estarse a esta última, atendida la naturaleza del ilícito, por cuanto la responsabilidad del Estado queda sujeta -en estos casos- a las reglas del derecho internacional, que excluyen –en todo aquello que sean contrarias a éste- las del derecho interno.

En consecuencia, atendido además que las leyes invocadas por la defensa fiscal no establecen verdaderas indemnizaciones sino que un conjunto de derechos y/o beneficios para las víctimas y sus familiares, como ocurre con las pensiones de reparación, medidas con las que el Ejecutivo y el Legislativo han intentado progresivamente hacerse cargo de un problema esencialmente humanitario, político y, en definitiva, histórico, no se avizora la existencia de incompatibilidad alguna con la indemnización pretendida en sede judicial, por ser diferente, siendo importante consignar que no está prohibido otorgarla y que así se ha hecho en múltiples sentencias.

SEPTIMO: Que, en base a los mismos argumentos, debe agregarse que la imprescriptibilidad de la acción penal trae como consecuencia la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción civil, producto del transcurso del tiempo, desde que el hecho generador de la responsabilidad es al mismo tiempo un delito de lesa humanidad, vale decir, no un ilícito civil cualquiera. De otra manera resultaría que se permite perseguir en todo tiempo y lugar estos crímenes, pero no así la responsabilidad civil, lo que no se entiende si se considera que evidentemente la responsabilidad penal es de mayor entidad que la patrimonial.

Por lo tanto y como este Tribunal ha señalado en pronunciamientos anteriores, aplica aquello de que quien puede lo más, puede lo menos, no pareciendo razonable un sistema que desintegre las responsabilidades que



«RIT»

Foja: 1

emanan de un mismo hecho, cuando éste tiene la connotación aludida con anterioridad.

OCTAVO: Que, así las cosas, descartadas las excepciones opuestas por la demandada, cabe destacar que respecto del daño moral la Excma. Corte Suprema lo ha conceptualizado como: *“un mal, un perjuicio o una aflicción en lo relativo a las facultades espirituales, vale decir, cuando se ocasiona a una persona un dolor o aflicción en sus sentimientos”* (R.D.J., T. LXVIII, secc. 4ª, pág. 168). Asimismo, ha sentenciado lo siguiente: *“Que el daño moral, como todo daño, debe ser probado por quien sostiene haberlo padecido; al menos cuando es la base de la obligación de repararlo, conforme al artículo 1698 del Código Civil. Sin embargo, en determinadas situaciones, por la naturaleza y características del daño material producido, particularmente cuando se trata de daño corporal, el daño moral es tan natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo. Así también ha sido resuelto (por ejemplo, Corte Suprema, rol 735-2015). En estas circunstancias se produce una alteración del peso de la prueba en cuanto, debiendo la víctima probar el daño, es el demandado quien tendría que probar que, debido a ciertos hechos o circunstancias, la víctima no sufrió efectivamente el daño que postula”* (Rol N° 12.176-2017).

Pues bien, el presente caso es justamente uno de aquellos en que *“el daño moral es tan natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo”*. En efecto, se trata del caso de un hombre de aproximadamente 30 años, que padeció por haber sido detenido ilegalmente y conducido a otra ciudad con el mismo propósito, proceso que duró varios meses, debiendo soportar vejámenes y torturas, consistentes en maltratos físicos y psicológicos, emprendiendo el exilio a Canadá para escapar y precaver futuras aprehensiones injustas.

Tales tratos, por cierto degradantes, que son consecuencia del actuar coercitivo de agentes del Estado, cuyo deber funcionario en ningún caso ni momento validó la adopción de procedimientos y medidas como las operadas en esta persona, abusando de una posición de poder y engendrando en la víctima una sensación de vulneración, despojo e incertidumbre persistente, que razonablemente no pueden tenerse como inermes o carentes de carga emocional, son un elemento definitivamente esclarecedor de lo que podría retratarse como una auténtica desdicha personal, por lo que al tenor de lo que disponen los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil y 1712 del Código Civil, se



«RIT»

Foja: 1

presume que el actor fue lesionado en su esfera inmaterial y en magnitud importante, al punto que prefirió huir de nuestro país.

No podría concluirse de otra manera, desde que el Estado de Chile ha reconocido oficialmente al demandante como víctima de prisión política y tortura, a partir de lo cual y en conjunto con los otros antecedentes adjuntados al proceso, como el relato consignado en carpeta de antecedentes del sr. Jorquera Guerrero, compuesta por los documentos que fueron considerados por la Comisión Valech, el relato de los testigos y, especialmente, que estos hechos no fueron cuestionados en el juicio en cuanto a su ocurrencia, solo cabe creer en la versión entregada, y en relación al dolor moral invocado, tenerlo por serio y grave, por no poder esperarse otra cosa.

Pues bien, conforme al juzgamiento efectuado por el Tribunal de los hechos narrados y la afectación del demandante en su dimensión espiritual, que se aprecia como permanente, se concluye en justicia el otorgamiento de una satisfacción de reemplazo, que en prudencia y equidad, a la luz del mérito de los antecedentes, se determina en la suma única y total de \$80.000.000, que se deberá pagar más reajustes e intereses legales, desde que esta sentencia resulte ejecutoriada.

NOVENO: Que los documentos no considerados especialmente en nada inciden o alteran la decisión que se hará, siendo innecesarios, debiendo estarse a su valoración y a las razones por las que se acogerá la presente demanda.

DECIMO: Que no se condenará en costas a la parte demandada, por estimarse que litigó con motivo plausible.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Constitución Política de la República; I. b) de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad; 7.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; 1437, 1698, 1699, 1700, 1702, 1706, 2314 y siguientes, 2514 y 2515 del Código Civil; y 144, 170, 342 y 384 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I. Que se rechazan las excepciones de reparación integral, pago y prescripción alegadas por la parte demandada.



«RIT»

Foja: 1

II. Que se acoge la demanda, solo en cuanto se condena a la parte demandada a pagar la suma de \$80.000.000 al demandante, por concepto de indemnización por daño moral, más reajustes e intereses.

III. Que no se condena en costas.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Rol C-32.959-2019

**DICTADA POR DON MATIAS FRANULIC GOMEZ, JUEZ TITULAR DEL
VIGESIMO NOVENO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, diez de Enero de dos mil veintidós**

